

Voces: ABUSO DE DERECHO - EQUIDAD - DOLO - CULPA CIVIL - CULPA PENAL - MULTA PROCESAL - COSTAS - BUENA FE - PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS - RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL - RECURSO DE APELACIÓN

Partes: Inmobiliaria Nacional Ltda. c/ Centrobanco | Recurso de Apelación

Tribunal: Corte Suprema

Fecha: 9-nov-1992

Cita: MJCH_MJJ2078 | RDJ2078

Producto: MJ

Doctrina: El juzgador no puede eludir el compromiso de establecer la justicia de lo discutido avanzando en la interpretación de las normas legales existentes o cumpliendo el mandato señalado en subsidio en el N° 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil que lo obliga a aplicar en último término los principios de equidad. No hay inconveniente en aplicar los fundamentos del abuso del derecho en aras de lograr una moralización en las relaciones jurídicas, cuando las contraprestaciones a que se encuentran vinculadas las partes cede en un provecho ilegítimo de una de ellas, rompiéndose el debido equilibrio que debe existir dentro de las equivalencias de las obligaciones. Cualquiera que sea el ámbito de aplicación de la doctrina sobre el abuso del derecho, dolo, culpa o negligencia, irracionalidad en su ejercicio, falta de interés o necesidad legítima, intención del agente en perjudicar, o con desvío de los fines de la contribución o para los que fue concebida e incluso, aplicado a procedimientos judiciales, es evidente que, de parte del agente causante del mal, debe existir un ánimo manifiesto de perjudicar a una evidente falta de interés o necesidad de lo que promueve o un actuar motivado por el afán de causar un perjuicio de su contraparte o contratante. Esa intención de perjudicar, no sólo debe manifestarse, cuando se actúa en la órbita de la responsabilidad extracontractual, sino que también para el caso en que el acto se ejecuta excediendo el interés jurídicamente protegido. En el ordenamiento procesal tiene aplicación el principio de probidad o de buena fe, que exige a los contendientes una actuación leal en el uso de pretensiones, defensas o recursos, sancionándose cualquier exceso en el caso de expedientes dilatorios o pretensiones infundadas, como lo es en el caso de las costas, los depósitos previos para formular incidentes o el pago de multas.

Vistos:

En la sentencia en alzada se hacen las siguientes correcciones: En el considerando 8° letra a) se reemplaza “trajujo” por “tradujo”, en el motivo 9° letra b) se sustrae “de” que se ubica entre “por” y “Centrobanco” y se intercala en la línea 5a de dicho numeral entre el artículo “la” y la palabra “demandante” la expresión “propiedad embargada a la”; en la foja 190 y relativo al mismo numeral se sustituye “hacer” por “haber”; en la letra c) del aludido fundamento se cambia “con” por “por el”.

Se tiene además presente:

Primero: Que este tribunal no ve inconveniente, tomando en consideración el desarrollo que ha adquirido el tema del abuso del derecho, en aplicar sus fundamentos en aras de lograr una moralización en las relaciones jurídicas y en definitiva lograr que se obtenga justicia, cuando las contraprestaciones a que se encuentran vinculadas las partes cede en un provecho ilegítimo de una de ellas, rompiéndose de este modo el debido equilibrio que debe existir dentro de las equivalencias de las obligaciones. La doctrina, en esta materia, ha avanzado más rápido que la ley, como se ha explicado en el curso del debate que se ha producido en este juicio y en las alegaciones formuladas en estrados por los abogados de las partes. El juzgador no puede eludir el compromiso de establecer la justicia de lo discutido avanzando en la interpretación de las normas legales existentes o cumpliendo el mandato señalado en subsidio en el N° 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que lo obliga a aplicar en último término los principios de equidad;

Segundo: Que en relación al abuso del derecho, se ha dicho que en Chile no se avanza desde el punto de vista jurisprudencial, de acuerdo con las actuales doctrinas sobre la materia, restringiendo su aplicación a lo que ha dicho Alessandri en cuanto a someter el principio a las normas que rigen la responsabilidad delictual y cuasidelictual civil “ese abuso no es sino una especie de acto ilícito. Debe, por tanto, resolverse con arreglo al criterio aplicable a cualquier hecho ilícito: habría abuso de derecho cuando su titular lo ejerza dolosa o culpablemente, es decir, con intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios”. En consecuencia, el autor limita el abuso del derecho sólo a la actuación dolosa y culpable. Empero, el profesor don Pablo Rodríguez Grez en sus trabajos sobre “De la relatividad jurídica” y “La obligación como deber de conducta típica” critica esta aplicación restringida, y avanza en su extensión sosteniendo: “aplicando estos conceptos a la materia que nos ocupa, digamos que quien ejerce su derecho (nacido de un contrato) dolosa y culpablemente, vale decir con miras a obtener un provecho que no le corresponde causando un daño, o con descuido, negligencia o falta de la debida atención, rompe el equilibrio de las prestaciones equivalentes por un hecho posterior al contrato que lo obligará a reparar el perjuicio causado. Paralelamente quien ejerce el derecho más allá de la realización del interés jurídicamente reconocido y protegido por la norma positiva, también romperá inevitablemente la interrelación de las prestaciones, haciendo que una de ellas sea más gravosa que la otra y contraviniendo la conmutatividad original”. Por último, como lo señala el profesor don Fernando Fueyo Laneri en su libro “Instituciones de Derecho Civil Moderno” (Edit. Jurídica de Chile), pág. 295, hace una conclusión expresando que “El ejercicio abusivo de los derechos es un verdadero pluritema, como pocos. Se integran o pueden integrarse en él: el fraude a la ley, la teoría de la causa, la buena fe, la moral, las buenas costumbres, el orden público, el ejercicio antisocial del derecho, la interpretación e integración de la ley, la equidad y otros temas de innegable importancia en el derecho moderno.”. Más adelante indica que “debe insistirse en que el principio del ejercicio abusivo de los derechos es de vastísima aplicación, abarcando desde el Derecho Público hasta el Derecho Privado, y tratándose de este último, comprende prácticamente todas las ramas”. El mismo autor se encarga de compilar estas materias del derecho comparado, o tratamientos jurisprudenciales extranjeros con referencias a criterios o standards.

Mencionando: que el abuso del derecho queda configurado: cuando el titular lo ejerce con dolo, culpa o negligencia; cuando lo usa de una manera irrazonable, excesiva o extravagante; o sin necesidad o interés legítimos; o en forma irregular o agravante; o causa un perjuicio inmotivado; o tiene intención de perjudicar; o se lo ejerce en forma contraria a la moral, a las buenas costumbres o de mala fe; o más allá de la necesidad determinada por su destino individual; o cuando se lo desvía de los fines de la institución o para los que fue conferido; o se lo utiliza en forma contraria del derecho natural; o de la manera que afecta la solidaridad social o se provoca un daño excesivo en relación a las consecuencias normales de su ejercicio. Es interesante acotar que este autor no considera como casos de abuso de derecho el ejercicio de acciones o actuaciones de carácter procesal, refiriéndose especialmente a los artículos 280 y 467 del Código de Procedimiento Civil, porque estima que este ejercicio abusivo atiende a derechos que se encuentran actualmente en el patrimonio del afectado, sean reales, personales

o de cualquier otra especie; pero no cuando se trate de facultades o potestades que confiere a todos el ordenamiento positivo y que se traducen en simples posibilidades de obrar, en cuyo caso se presenta la alternativa de hacerlo bien o causando perjuicio injustificado u otro. Se trata, señala, de casos de eventual responsabilidad civil y nada más;

Tercero: Que en el presente caso, precisamente, el fundamento fáctico que motiva la demanda indemnizatoria de perjuicios, se hace consistir en que el demandado en un juicio ejecutivo hipotecario en que actuó como ejecutante, promovió 2 incidentes de nulidad procesal, pretendiendo dejar sin efecto el remate de la finca hipotecada, adjudicada a la sociedad demandante, artículos que luego de una larga tramitación fueron rechazados. Que dichos incidentes sólo tuvieron por objeto causar un perjuicio a los subastadores sin que los incidentistas tuvieran una causa o interés legítimos para deducirlos. Sin embargo, siendo efectiva la existencia de las aludidas incidencias, su duración y resultado, es lo cierto que también hay que considerar todos los hechos que rodearon la ejecución misma y que el fallo de primer grado deja establecidos en los considerandos tercero y noveno, todo lo cual evidencia, tanto de parte de los ejecutados de aquel juicio, como de los terceristas que advinieron un afán de perjudicar al acreedor, al nivel de privarlo no sólo de su crédito sino también de la hipoteca que garantizaba dicha acreencia;

Cuarto: Que cualquiera sea el ámbito de aplicación de la doctrina sobre el abuso del derecho, dolo, culpa o negligencia, irracionalidad en su ejercicio, falta de interés o necesidad legítimos, intención del agente en perjudicar, o con desvío de los fines de la institución o para los que fue concebida e incluso, aplicado a procedimientos judiciales, es evidente que, de parte del agente causante del mal, debe existir un ánimo manifiesto de perjudicar o una evidente falta de interés o necesidad de lo que promueva o un actuar motivado por el afán de causar un perjuicio a su contraparte o cocontratante. Esa intención de perjudicar no sólo debe manifestarse, como es lógico, cuando se actúa en la órbita de la irresponsabilidad extracontractual, sino que también para el caso en que el acto se ejecuta excediendo el interés jurídicamente protegido.

Quinto: Que en nuestro ordenamiento procesal, tiene aplicación el principio de probidad o de buena fe, que exige a los contendientes una actuación leal en el uso de pretensiones, defensas o recursos, sancionándose cualquier exceso en el uso de expedientes dilatorios o pretensiones infundadas. Ejemplo de lo aseverado lo constituye el pago de costas, la obligación de depósitos previos para formular incidentes que han sido rechazados por más de dos veces, o pago de multas si estimare el juez que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso –art. 88 del Código de Procedimiento Civil– o estimar doloso el procedimiento del que solicita medidas prejudiciales precautorias –art. 20° del aludido Código–; asimismo la situación de la demanda ejecutiva desistida del art. 467 del mismo cuerpo de leyes, en que se impone al ejecutante el deber de responder de los perjuicios que se hayan causado en la demanda ejecutiva. Pero lo dicho, no implica en todo caso coartar el derecho de defensa que le asiste a cada litigante, garantía que tiene protección constitucional en el art. 19 N° 3 de la Constitución Política, que le permite ejercitar todos los recursos o mecanismos procesales para asegurar su pretensión, aunque dicho ejercicio cause daño a otro, lo que normalmente va a ocurrir en un litigio.

Sexto: Que excluido en el presente caso, alguna actuación dolosa o culpable del demandado en el ejercicio de las incidencias que promovió como ejecutante en el juicio ejecutivo en que se subastó el bien hipotecado, porque no ha habido prueba bastante para este fin, tampoco se advierte que en el uso de estas incidencias haya éste carecido de un interés propio y que haya actuado movido sólo con afán de perjudicar a los terceros subastadores. Por el contrario, frente a los hechos probados en el proceso, era evidente que tenía un interés jurídico para promover dichas incidencias, que pretendían anular un remate que efectuado para satisfacer su crédito sin embargo ninguna utilidad le había reportado, por el uso de tercerías y recursos procesales que aparentemente provenían de causa injustificada o ilegítima. Las incidencias de nulidad se tramitaron de acuerdo al ordenamiento vigente y luego que el tribunal

estimó del caso darles curso y no considerarlas, como pudo hacerlo, inconexas con el asunto que era materia del juicio o extemporáneos o por último por haber mediado un efecto preclusivo que obstaba a su tramitación. La circunstancia de que dichos incidentes, cuya duración pudo ser excesiva, lo que no puede imputarse únicamente al incidentista dentro de la relación procesal, se hubiesen rechazado, significa sólo que falló la pretensión aun cuando se hubiese fundado el rechazo en la falta de legitimación para accionar, esta decisión no puede significar que al momento de la interposición de los artículos, éstos carecían de interés, ya que de sus propios fundamentos se desprende que los hubo; había una pretensión de relevancia jurídica para justificar la nulidad impetrada, ya que con ella se pretendía una nueva licitación de la propiedad hipotecada, con resguardo evidente de los intereses económicos del banco acreedor.

Por estas consideraciones, se confirma con costas del recurso, la sentencia apelada de treinta de enero de mil novecientos noventa, escrita a fs. 173.

Redactó el ministro Sr. Juica.

Milton Juica A., María A. Morales V., Orlando Álvarez H.